

Resolució 1525/2025, de 9 d'octubre

Número d'expedient de la Reclamació: 1260/2025

Administració reclamada: Ajuntament de Cervelló

Informació reclamada: Diversa en relació amb la contractació de serveis de gestió de colònies felines.

Sentit de la resolució: Estimació

Resum: La informació sol·licitada i reclamada és informació pública i qualsevol persona hi té dret, llevat que concorrin causes legals que en determinin la denegació o l'accés restringit i que s'han d'interpretar de manera proporcional a la seva finalitat i a la presència d'interessos públics i privats que hi concorrin. Pel que fa als límits, l'article 21.1.c) LTAIPBG estableix com a límit "el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei". La norma de referència pel que fa a la contractació pública és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que concretament, en l'article 133.1, preveu que els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Aquesta declaració de confidencialitat no vincula a l'òrgan de contractació, que podrà acceptar-la totalment o parcialment o, fins i tot, no acceptar-la. Altrament, una part de la informació reclamada està subjecte a publicitat activa (article 13 LTAIPBG i article 43 del Decret 8/2021). Tenint en compte aquestes circumstàncies aquesta Comissió no pot més que estimar el dret d'accés a la informació pública reclamada amb el benentès que, pel cas que hi hagi documentació declarada com a confidencial en el moment de la licitació, és responsabilitat exclusiva de l'òrgan de contractació decidir de forma motivada si la documentació declarada com a tal compleix amb els requisits.

Pel que fa a la informació pública sol·licitada subjecta a publicitat activa, l'Ajuntament podrà facilitar l'accés mitjançant indicació de la font d'informació en aplicació de l'article 35.2.b) LTAIPBG. Igualment, és important reiterar, de nou, que atesa la manca de col·laboració és responsabilitat exclusiva del mateix Ajuntament aplicar el règim previst als articles 23, 24, 25 als efectes de complir amb la normativa relativa a la protecció de dades personals en el moment d'executar d'aquesta resolució. Per al cas que no disposi de la informació o de les dades sol·licitades, ho haurà de fer constar així, sense que quedi obligada per aquesta resolució a elaborar-les per satisfer la reclamació.

Paraules clau: Ajuntaments. Persones físiques. Entitats animalistes. Benestar animal. Colònies felines. Contractacions. Contractes de serveis. Òrgans de contractació. Publicitat activa. Reclamació contra manca de lliurament. Manca de col·laboració. Sense límits. Estimació.

Ponent: Mercè Aymerich i Boltà

Antecedents

1. El 16 de juliol de 2025 entra a la GAIP la Reclamació 1260/2025, presentada per una persona física en nom d'una entitat animalista (Alerta Fauna Urbana) contra l'Ajuntament de Cervelló, en relació amb la sol·licitud indicada a l'antecedent següent d'acord amb la Llei 19/2014, del 29 de



desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG) i el Reglament de la GAIP, aprovat pel Decret 111/2017, de 18 de juliol (RGAIP). La persona reclamant manifesta no haver rebut resposta de l'administració.

2. El 6 de juny de 2025 la persona reclamant presenta una instància genèrica a l'Ajuntament de Cervelló en la qual sol·licita informació i fa un seguit d'advertències i denúncies en relació a una empresa. La petició d'informació es concreta en:

“I. INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE GESTIÓN DE COLONIAS FELINAS: Que se confirme si este Ayuntamiento ha adjudicado y/o tiene en vigor contratos de servicios con la empresa COMERTU CONTROL DE AVES S.L. (NIF B71260087) o ASESORÍA DE SERVICIOS TUDELA S.L. (NIF B71331102) para la gestión de colonias felinas.

II. EN CASO AFIRMATIVO (Expediente Completo de Gestión de Colonias Felinas): Se solicita acceso y copia del expediente administrativo COMPLETO de cada contratación para la gestión de colonias felinas, incluyendo (sin limitarse a):

1. Contrato/s firmados.
2. Oferta presentada por la empresa.
3. Decreto o acuerdo de adjudicación.
4. Informes técnicos/jurídicos.
5. Programa de gestión de colonias felinas presentado por la empresa.
6. Todas las facturas emitidas al Ayuntamiento y cualquier factura de servicios veterinarios vinculadas, detallando inequívocamente el número de gatos atendidos, tipo de intervención y costes individualizados.
7. Justificación económica completa de todos los pagos efectuados.
8. Memoria detallada de todas las actuaciones realizadas por COMERTU CONTROL DE AVES S.L. desde el inicio del contrato de gestión de colonias felinas, que incluya fechas, ubicaciones exactas de las intervenciones (colonias intervenidas), personal implicado, métodos utilizados y resultados específicos obtenidos (número de gatos capturados, esterilizados, identificados, retornados, trasladados, etc.), con desglose mensual o por actuación.
9. Documentación y/o informes que detallen y acrediten:
 - d) La ubicación específica, naturaleza y descripción de las instalaciones (sean estas fijas, móviles, propias de la empresa o de terceros) donde COMERTU CONTROL DE AVES S.L. aloja temporalmente a los gatos capturados en este municipio, tanto antes de su traslado para la intervención veterinaria como durante el periodo de recuperación postoperatoria, si este último estuviera a su cargo.
 - e) Las condiciones de dicho alojamiento temporal, incluyendo: tipo y dimensiones de las jaulas o espacios utilizados, medidas de higiene, control y protección climática, protocolo de alimentación y provisión de agua, y supervisión veterinaria o de personal cualificado durante dicho periodo.



- f) Los protocolos establecidos por la empresa respecto a los tiempos máximos de permanencia de los gatos en estas instalaciones previas a la cirugía y antes de su retorno a la colonia, así como los procedimientos para minimizar el estrés durante la captura, el confinamiento y el transporte.
- g) En caso de que las instalaciones de alojamiento o las clínicas veterinarias utilizadas se encuentren significativamente distantes del punto de captura de su municipio, se solicita la justificación de dicha operativa y las medidas específicas adoptadas para garantizar el bienestar animal y minimizar el estrés y riesgos durante los traslados prolongados.

10. Comunicaciones oficiales entre el Ayuntamiento y la empresa contratista.

11. Documentación que acredite el destino final de los gatos no retornados a su colonia de origen (si los hubiera) y el cumplimiento de los protocolos éticos y legales aplicables en tales casos.

III. VERIFICACIONES REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO: Se solicita que este

Ayuntamiento indique expresamente qué verificaciones realizó, antes o durante la vigencia de cualquier contrato con dichas empresas, sobre los siguientes aspectos:

1. Su situación de hoja registral CERRADA.
2. La adecuación de su objeto social y CNAE para la gestión ética de colonias felinas.
3. La compatibilidad de sus códigos SIC y su actividad principal declarada ("EXTERMINIO ANIMALES DAÑINOS Y DESINFECCIÓN") con la gestión de colonias felinas, y si se verificó que la empresa posee los 'conocimientos específicos y solvencia técnica' exigidos por la Ley 7/2023 (Art. 39).
4. Su capacidad operativa real (MICROEMPRESA, 4 empleados, capital social 3.000€) para atender el volumen de contratos publicitados y para aplicar el método CER sin depender fundamentalmente de voluntariado.
5. La relación coste-efectividad de los servicios.
6. Respecto a la financiación de los servicios contratados a COMERTU CONTROL DE AVES S.L.:
 - a) Si los fondos destinados al pago de dichos servicios provenían, total o parcialmente, de subvenciones públicas (ya fueran de ámbito provincial, autonómico, estatal, europeo u otro).
 - b) En caso afirmativo, qué verificaciones específicas realizó este Ayuntamiento para asegurar la elegibilidad de COMERTU CONTROL DE AVES S.L. como empresa contratista para la ejecución de servicios financiados con dichos fondos públicos. Esto incluye comprobar si la situación mercantil de la empresa (por ejemplo, tener la hoja registral cerrada por no depositar cuentas) y su cumplimiento de obligaciones fiscales y con la Seguridad Social eran compatibles con los requisitos establecidos en la Ley General de Subvenciones (en particular, el Artículo 13.2,



apartados como el 'g', u otra normativa aplicable que pudiera impedir que una empresa en tales circunstancias sea receptora indirecta o ejecutora de servicios sufragados con ayudas públicas).

7. En relación con el Programa de Gestión de Colonias Felinas que COMERTU CONTROL DE AVES S.L. haya presentado o elaborado para este municipio:

a) ¿Qué actuaciones o verificaciones específicas llevó a cabo el Ayuntamiento para asegurarse de la originalidad y especificidad de dicho programa para su municipio? Es decir, ¿cómo se comprobó que no se trataba de un documento genérico o una plantilla estándar replicada de otros municipios, sino de un trabajo técnico adaptado real y sustancialmente a las particularidades y necesidades concretas de su localidad?

b) ¿De qué manera se justificó y validó el coste económico asociado a la elaboración o adquisición de dicho programa? ¿Qué criterios se emplearon para determinar que el precio pagado era proporcionado y adecuado al esfuerzo técnico y al valor real del trabajo supuestamente específico realizado por la empresa para este municipio?

c) Respecto a los datos fundamentales del programa, como el censo de gatos y la geolocalización de las colonias felinas en su municipio:

i) ¿Cuál fue el origen específico de estos datos? ¿Fueron resultado de un trabajo de campo exhaustivo y original realizado por COMERTU en el municipio, o se basaron, total o parcialmente, en información preexistente facilitada por el propio Ayuntamiento, alimentadoras locales, asociaciones de protección animal u otras fuentes?

ii) Si la empresa afirmó haber realizado un trabajo de campo propio para la obtención de estos datos, ¿qué pruebas concretas y verificables (informes de campo detallados, metodología empleada, personal asignado, fechas de realización, etc.) exigió y validó este Ayuntamiento para acreditar la veracidad y el rigor de dicha labor antes de dar por bueno el programa?.

8. En lo referente a la protección de datos personales de las personas colaboradoras en la gestión de colonias felinas (alimentadoras, gestoras, voluntarias, etc.) en el municipio:

a) ¿Ha facilitado este Ayuntamiento a la empresa COMERTU CONTROL DE AVES S.L., o a personal vinculado a la misma, datos de carácter personal de dichas personas colaboradoras (tales como nombre completo, número de DNI, dirección postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico, ubicaciones exactas de las colonias que gestionan, etc.)?

b) En caso afirmativo, ¿bajo qué base legal y con qué finalidad específica se comunicaron dichos datos personales a la empresa contratista?



c) ¿Se recabó el consentimiento expreso, previo e informado de cada una de estas personas para la cesión de sus datos personales a COMERTU CONTROL DE AVES S.L. para los fines comunicados, en cumplimiento estricto del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD (UE) 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)? En caso afirmativo, se solicita que el Ayuntamiento informe sobre el procedimiento seguido para obtener dicho consentimiento y certifique, de forma convenientemente anonimizada si fuera preciso para proteger datos de terceros, la existencia y adecuación de dichos consentimientos a la normativa vigente.

d) ¿Qué medidas de información previa y garantías de protección de datos ha implementado el Ayuntamiento para asegurar que tanto la posible cesión de datos por parte del consistorio como el tratamiento de datos personales que pudiera realizar la empresa COMERTU CONTROL DE AVES S.L. en el marco del contrato se ajustan a la legalidad vigente y respetan los derechos fundamentales de las personas afectadas?”.

A continuació fa una advertència en relació a l'empresa i entitats vinculades i una nota sobre la protecció de dades.

3. El 13 d'agost de 2025 la GAIP admet provisionalment la Reclamació, informa la persona reclamant sobre els aspectes més rellevants de la seva tramitació i de la posició jurídica que ostenta com a persona interessada, de conformitat amb la legislació de procediment administratiu i la de transparència i accés a la informació pública. Li demana especialment que informi la GAIP immediatament de les comunicacions que rebi de l'Administració reclamada relatives a la informació pública sol·licitada, mentre duri la Reclamació.
4. El 18 d'agost de 2025 la GAIP comunica la Reclamació a l'Ajuntament de Cervelló i li requereix que, dins del termini de quinze dies establert per l'article 33.4 RGAIP, li trameti un informe, així com còpia de l'expedient de la sol·licitud d'informació de la qual deriva i, en general, dels antecedents que puguin ser rellevants per resoldre-la. El dia 29 de setembre es reitera aquesta petició d'informació.

Vençut el termini indicat, no consta a la GAIP la recepció de la documentació requerida a l'Administració.

Fonaments jurídics

1. Competència de la GAIP i contingut i abast general del dret d'accés a la informació pública

D'acord amb l'article 39.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (LTAIPBG) i 29 del Decret 111/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova



el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (RGAIP) aquesta Comissió és competent per tramitar i resoldre aquesta Reclamació. L'article 2.b i c LTAIPBG defineixen la informació pública i preveuen el dret d'accés a les persones per a sol·licitar i obtenir-la que d'acord amb l'article 18.1 LTAIPBG, tant a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

L'article 20 LTAIPBG preveu els requisits i criteris per a l'aplicació dels límits legals al dret d'accés a la informació pública, que l'Administració no disposa de potestat discrecional i ha d'indicar en cada cas els motius que ho justifiquen. Els articles 21 i 22 LTAIPBG estableixen que aquests límits no són d'aplicació automàtica i absoluta i han de ser aplicats d'acord amb criteris de proporcionalitat i temporalitat i han d'atendre les circumstàncies de cada cas concret, especialment la concurrència d'un interès públic o privat superior que justifiqui l'accés a la informació.

2. Manca de col·laboració de l'Administració

Els antecedents posen de manifest que l'Administració no aporta a aquest procediment la documentació que li ha estat sol·licitada per la GAIP, d'acord amb el previst per l'article 33.4 RGAIP. Si bé aquest fet ha de ser qualificat com una manca de col·laboració de l'administració amb l'efectivitat dels procediments previstos legalment per a la garantia del dret d'accés a la informació pública, no pot impedir la resolució de la Reclamació ja que l'article 33.7 RGAIP preveu expressament que "la manca de tramesa de la informació o la no emissió dels informes sol·licitats per la Comissió no impedeix que aquesta continuï la tramitació".

3. Sobre el dret a la informació sol·licitada i límits

La informació sol·licitada i reclamada -diversa en relació amb un contracte de serveis per a la gestió de colònies felines-, si es disposa, és d'acord amb l'article 2.b LTAIPBB informació pública, ja que és "informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d'acord amb el que estableix aquesta llei". Cal tenir en compte que l'article 53 (apartats 1 i 2) DTAIP inclou "qualssevol dades o documents que les administracions públiques han elaborat, posseeixen, o poden legítimament exigir a terceres persones com a conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions" i que "ha de ser temporalment preexistent a la presentació de la sol·licitud d'accés".

L'Ajuntament de Cervelló és, d'acord amb l'article 3.1.a) LTAIPBG, un subjecte obligat a resoldre les sol·licituds d'accés a la informació pública en temps i en la forma escaient.

Pel que fa a l'exercici de dret d'accés a la informació pública malgrat ser un dret universal, no és un dret absolut. La LTAIPBG reconeix el dret subjectiu d'accés a la informació pública a qualsevol



persona, en els termes i condicions regulats per la mateixa Llei (art. 2.c). I d'acord amb els articles 18.1 i 20.1 LTAIPBG, qualsevol persona hi té dret, llevat que concorrin causes legals que en determinin la denegació o l'accés restringit i que s'han d'interpretar de manera proporcional a la seva finalitat i a la presència d'interessos públics i privats que hi concorrin (article 22.1 LTAIPBG).

Pel que fa als límits, l'article 21.1.c) LTAIPBG estableix com a límit "el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei". La norma de referència pel que fa a la contractació pública és la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

L'article 133.1 de la Llei 9/2017 preveu que: "Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria d'accés a la informació pública i de les disposicions que conté aquesta Llei relativa a la publicitat de l'adjudicació i a la informació que s'ha de donar als candidats i als licitadors, els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. El caràcter de confidencial afecta, entre d'altres, els secrets tècnics o comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. El deure de confidencialitat de l'òrgan de contractació, així com dels seus serveis dependents, no es pot estendre a tot el contingut de l'oferta de l'adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació que, si s'escau, generi directament o indirectament l'òrgan de contractació en el curs del procediment de licitació. Únicament es pot estendre a documents que tinguin una difusió restringida, i en cap cas a documents que siguin públicament accessibles. El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts no confidencials dels contractes subscrits, com ara, si s'escau, la liquidació, els terminis finals d'execució de l'obra, les empreses amb les quals s'ha contractat i subcontractat, i, en tot cas, les parts essencials de l'oferta i les modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal".

Aquesta regulació estableix, doncs, quina informació pot tenir la consideració de confidencial, en quin moment s'ha de fer aquesta declaració de confidencialitat, indicant que es farà en el moment inicial de presentar l'oferta i de forma prou justificada i que no pot abastar tota la documentació presentada, ja que estaria perjudicant les obligacions en matèria de transparència i dret d'accés. En aquest sentit, el Tribunal Central de Recursos Contractuals, i de la que s'ha fet ressò la mateixa GAIP, va considerar que una extensió de la confidencialitat a tota la proposició de l'adjudicatari podria estar incursa en frau de llei¹. Aquesta declaració de confidencialitat no vincula a l'òrgan de contractació, que podrà

¹<https://contratosdelsectorepublico.es/DocumentosWEB/02TribunalesContractuales/TACRC/RTACRC%20592-2014.pdf>



acceptar totalment o parcialment la declaració de confidencialitat o, fins i tot, no acceptar-la, si considera que la declaració inclou dades que no poden tenir el caràcter de confidencial, com documents que siguin públicament accessibles.

En aquest cas, la persona reclamant no exerceix el dret d'accés com a persona interessada en l'expedient (que disposa d'un règim d'accés a l'expedient previst a l'article 52 LCSP), sinó que actua en qualitat de representant d'una entitat animalista. És interessant referir, per posar en context, que aquest article ja es preveu que sigui l'òrgan de contractació (que és qui disposa de la informació i ha pogut analitzar-la i avaluar-la en el procediment de contractació) qui ha de facilitar l'accés als interessats i confirmi o no aquesta confidencialitat, prèvia anàlisi, cas per cas, de la documentació declarada confidencial pel licitador prèvia ponderació de l'equilibri en la fixació de la documentació considerada com a confidencial pels licitadors afectats en relació amb el dret d'accés. Per tant, el responsable per determinar l'accés o no a la documentació declarada com a confidencial, no són les empreses licitadores, sinó l'òrgan de contractació. I que aquesta declaració no es pot assenyalar de forma genèrica sinó que ha de referir-se a secrets tècnics o comercials, que comporti un avantatge competitiu per l'empresa, que es tracti d'informació veritablement reservada, és a dir, desconeguda per tercers, que suposi un valor estratègic per l'empresa i pugui afectar a la seva competència en el mercat i que no es produeixi una minva en els interessos que es volen garantir amb els principis de publicitat i transparència.

Altrament, és convenient afegir que una part de la informació reclamada està subjecte a publicitat activa, concretament la referida a la contractació pública que es regula en l'article 13 LTAIPBG i article 43 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Per tant, i tenint en compte aquestes circumstàncies aquesta Comissió no pot més que estimar el dret d'accés a la informació pública reclamada amb el benentès que, pel cas que hi hagi documentació declarada com a confidencial en el moment de la licitació, és responsabilitat exclusiva de l'òrgan de contractació decidir de forma motivada si la documentació declarada com a tal pels tercers afectats compleix amb els requisits, d'acord amb el que determina l'article 133 LCSP. Cal advertir que la confidencialitat que s'hagi declarat per part dels licitadors en el moment de presentació de l'oferta no vincula a l'òrgan de contractació, que podrà acceptar totalment o parcialment la declaració de confidencialitat o, fins i tot, no acceptar-la, si considera que la declaració inclou dades que no poden tenir el caràcter de confidencial.

Pel que fa a la informació pública sol·licitada subjecta a publicitat activa, l'Ajuntament podrà facilitar l'accés mitjançant indicació de la font d'informació en aplicació de l'article 35.2.b) LTAIPBG.

Igualment, és important reiterar, de nou, que atesa la manca de col·laboració és responsabilitat exclusiva del mateix Ajuntament aplicar el règim previst als articles 23, 24, 25 als efectes de complir



amb la normativa relativa a la protecció de dades personals en el moment d'executar d'aquesta resolució.

Per al cas que no disposi de la informació o de les dades sol·licitades, ho haurà de fer constar així, sense que quedi obligada per aquesta resolució a elaborar-les per satisfer la reclamació.

4. *Obligatorietat dels titulars de documents públics a disposar d'un sistema de gestió documental (SGD) i atribucions de la funció pública de secretaria*

La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i gestió de documents estableix l'obligatorietat dels titulars de documents públics a disposar d'un sistema de gestió documental que garanteixi el tractament correcte dels documents en tot el seu cicle de vida i que permeti complir amb les obligacions de transparència; i que l'organització, avaluació i conservació i l'accés a aquests són responsabilitat directa dels seus titulars (article 7 i 8).

La Disposició Addicional Onzena de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que els documents electrònics s'han de gestionar i conservar en expedients electrònics d'acord amb les prescripcions de la normativa en matèria d'arxius i documents.

Així mateix, l'LTAIPBG reconeix els sistemes de gestió de documents públics com a facilitadors de dades i documents autèntics (art. 5.2), la necessitat d'estructurar la informació seguint criteris temàtics i cronològics, seguint el quadre de classificació documental corporatiu i incorporant-hi índexs o guies de consulta (art. 6.1.d) i l'obligació d'establir un sistema de gestió de documents, informació i dades integrat que permeti la interoperabilitat entre les administracions, la localització de qualsevol document o informació i la vinculació automàtica de cada document o conjunt de dades al seu règim d'accés i publicitat (art. 19.3).

l'article 3 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que regula la funció pública de secretaria estableix en punt 2 la funció de fe pública, i entre aquestes la direcció superior dels arxius i registres de l'entitat local (l). Així doncs, i en conseqüència d'aquest mandat legal i el d'assessorament legal preceptiu (article 2.1.a), ha de ser coneixedora de l'existència d'un SGD, impulsora si no en disposa i vetllar per la documentació amb una sistemàtica de treball mínima sobre la documentació de la qual n'és el custodi i responsable primer de la manca de localització.

Els documents produïts o rebuts per la Generalitat, els ens locals i les entitats autònomes, les empreses públiques i les altres entitats que en depenen integren el patrimoni documental de Catalunya i en conseqüència estan subjectes al Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents.



Així doncs, atenent a aquests preceptes legals, la informació sol·licitada i reclamada, en el cas que existeixi, ha de formar part d'un expedient administratiu o de diferents expedients administratius, que han d'estar perfectament classificats de manera que permeti la seva recuperació i facilitar-ne, si escau, l'accés. Com a referència i seguint el model de Quadre de classificació per a l'Administració Local del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aquesta documentació hauria d'estar classificada dins el nivell Contractació administrativa i assistència tècnica (codi 0046), sèrie Contractacions de serveis (1403).

5. Seguiment de l'execució

L'article 43.5 LTAIPBG estableix que "l'Administració ha de comunicar a la Comissió les actuacions fetes per a executar els acords de mediació i per a donar compliment a les resolucions dictades per la Comissió". Sobre la base d'aquestes comunicacions i de les efectuades per les persones interessades, la GAIP ha de fer seguiment del compliment de les seves resolucions, d'acord amb el que preveuen els articles 48 i 49 RGAIP i l'apartat 30 del seu Manual de reclamació, i pot adoptar les mesures que s'hi preveuen en cas d'incompliment.

L'article 43 LTAIPBG estableix que si l'Administració incompleix el termini establert pels acords de mediació o per les resolucions de la GAIP per lliurar la informació reclamada, les persones interessades ho poden comunicar a la Comissió perquè aquesta en requereixi el compliment; la desatenció d'aquest requeriment, vista la remissió expressa feta a aquest precepte per l'article 77.2.b LTAIPBG, ha de ser qualificada d'infracció molt greu amb relació al dret d'accés a la informació pública (que pot ser sancionada de conformitat amb els articles 81 i 82 LTAIPBG).

Així mateix, l'article 25.2.k RGAIP preveu la publicació en el web de la Comissió dels casos que els seus requeriments han estat desatesos pels subjectes obligats.

6. Publicitat de les resolucions de la GAIP

L'article 44 LTAIPBG preveu que les resolucions de la GAIP s'han de publicar en el portal de la Comissió previst a l'article 25 RGAIP, amb la dissociació prèvia de les dades personals.

Resolució

Sobre la base dels antecedents i fonaments jurídics exposats, el Ple de la GAIP, en la sessió de 9 d'octubre de 2025, resol per unanimitat:

1. Estimar la Reclamació 1260/2025 i declarar el dret de la persona reclamant a la informació sol·licitada, d'acord amb les consideracions fetes al fonament jurídic 3.



2. Requerir a l'Ajuntament de Cervelló que lliuri a la persona reclamant la informació indicada a l'apartat 1 dins del termini màxim de quinze dies.
3. Requerir a l'Ajuntament de Cervelló a informar la GAIP, dins del termini de quinze dies, de l'òrgan o la persona responsable del compliment d'aquesta Resolució, així com de les actuacions dutes a terme per complir-la.
4. Convidar a la persona reclamant que informi la GAIP de qualsevol incidència que es produeixi amb motiu del compliment d'aquesta Resolució.
5. Declarar finalitzat el procediment relatiu a la Reclamació 1260/2025 i donar publicitat d'aquesta resolució al web de la GAIP.

Iolanda Pineda Balló

Presidenta

Els terminis establerts en aquesta Resolució per lliurar la informació s'han de comptar en dies hàbils (descomptant festius i dissabtes) i si no s'especifica una altra cosa, comencen a partir de l'endemà de la recepció de la seva notificació per l'Administració reclamada.

L'Administració obligada pot sol·licitar a la GAIP l'ampliació del termini atorgat per fer efectiu el lliurament de la informació. Aquesta sol·licitud només pot ser admesa a consideració si és notificada a la GAIP abans que fineixi el termini fixat a la Resolució, i s'ha de fonamentar en circumstàncies que no hagin pogut ser tingudes en compte per la Comissió abans de dictar la seva Resolució. La GAIP únicament atorgarà l'ampliació sol·licitada, després d'informar-ne a la persona reclamant, si l'Administració obligada ha justificat de forma precisa i consistent la seva necessitat.

Si l'Administració obligada no lliura la informació dins del termini establert per aquesta Resolució, la persona reclamant pot posar-ho en coneixement de la GAIP, per tal que la Comissió en requereixi el compliment. Mentre no s'acompleixi plenament la Resolució, la Comissió difondrà al seu web www.gaip.cat l'incompliment de l'Administració obligada, d'acord amb l'article 25.2.k RGAIP.

Tot això sens perjudici que la persona reclamant pugui, considerant que aquesta Resolució és un acte administratiu declaratiu de drets que vincula l'Administració, requerir la seva execució davant dels Tribunals, a l'empara de l'article 29.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Aquesta acció es pot interposar després que hagin transcorregut tres mesos des que la persona afectada ha reclamat formalment i directament a l'Administració el compliment d'aquesta Resolució.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.